



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0184/2017

FECHA: 07 de agosto de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la reclamación número RT/0184/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos que han dado lugar a esta Reclamación pueden sistematizarse como sigue.
 - Por escrito registrado el 3 de mayo de 2017 en el Ayuntamiento de Mocejón - Toledo-, el ahora reclamante, tras exponer que había planteado una serie de alegaciones en el trámite de elaboración del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Infantil "La Oca" de dicho Ayuntamiento y que con relación a una de ellas -en la que planteaba que se retirase la discriminación de atribuir dos puntos a los trabajadores que ya prestan servicio en dicha Escuela- se le había indicado que "el principio de conciliación de la vida familiar y laboral es uno de los principios rectores de la política de personal del Ayuntamiento de Mocejón, lo que motiva que se facilite la admisión en el centro de los descendientes del personal afectado", señala que

No encontrando publicado en la Sede Electrónica de este organismo, ni en el Portal de transparencia el documento en el que quedan plasmados

ctbg@consejodetransparencia.es



“los principios rectores de la política del personal del Ayuntamiento de Mocejón” y tras haberlo solicitado a la dirección de correo electrónico información@mocejon.es y al haberse obviado la obligación recogida en la ordenanza de Transparencia, acceso a la información y reutilización de este ayuntamiento al no facilitar la información solicitada no haber asistido al usuario en la búsqueda de ésta [...] solicita remitan a la dirección de correo indicada arriba el documento oficial en el que se recogen los principios rectores de personal del Ayuntamiento de Mocejón.

- Mediante escrito del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mocejón de 8 de mayo de 2017 se traslada al solicitante lo siguiente. Por una parte, desde una perspectiva formal, se indica que *las direcciones de correo electrónico no resultan un medio adecuado para la presentación de solicitudes*, debiendo el interesado *servirse del Registro General de Documentos o bien, del Registro Electrónico, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento*. Se aporta enlace electrónico de la sede y se ampara dicho procedimiento en lo dispuesto en el artículo 16.4 y 5 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por otra parte, desde una perspectiva sustantiva o material, se expone que *respecto de la solicitud de publicación de los principios rectores de la política de personal del ayuntamiento de Mocejón [...] los principios jurídicos inspiran las normas y actuaciones de los poderes públicos, principios que se encuentran recogidos en nuestra Carta Magna, concretamente y en lo que nos ocupa, en el artículo 39.1 [...]*; indicándose, al respecto, que el Tribunal Constitucional mantiene que “la dimensión constitucional de las medidas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) de las mujeres trabajadoras como desde la del mandato de protección a la familia y a la infancia (art. 39 CE), ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa”. Por todo lo cual el Ayuntamiento entiende que no procede publicación alguna sobre este principio rector en el portal de transparencia ni cabe hacerle llegar documento alguno, remitiéndole a la consulta de la Constitución Española y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
- Por escrito de 7 de junio de 2017 el interesado interpone una Reclamación al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG- en la que manifiesta que el contenido de la resolución que se reclama no satisface la solicitud de información. Los motivos de la denegación expresa se fundamentan en que le remiten a la consulta de la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (sin indicar ninguna sentencia). Se solicita el documento donde se recojan esos “Principios rectores” y que se hagan públicos. Y se adjunta un escrito de ampliación a la Reclamación donde se exponen y alegan de forma numerada los presupuestos ya citados anteriormente, además de indicar la no



conformidad con la respuesta de la Alcaldía respecto a la limitación en las formas de presentar solicitudes y la falta de cumplimiento al artículo 30.1 de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento, pues no se menciona que contra la resolución cabe interponer reclamación potestativa, o recurso contencioso-administrativo.

2. El 12 de junio de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo se dio traslado del expediente, por una parte, a la Oficina de Transparencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para conocimiento y, por otra parte, al Ayuntamiento de Mocejón a fin de que, en el plazo de quince días, se formularan las alegaciones que estimasen por conveniente, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizar.

Por escrito registrado en esta Institución el 21 de junio de 2017, el Ayuntamiento de Mocejón remite las alegaciones que, en síntesis, pueden sistematizarse como sigue.

- *La primera alegación formulada por el reclamante no resulta competencia ni materia objeto de transparencia, en tanto en cuanto afecta a la regulación de la presentación de solicitudes por parte de los interesados en los registros administrativos de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, considerando que en cualquier caso, que al amparo del artículo 4.1.c) de la Ordenanza de Transparencia, acceso a la información y reutilización del ayuntamiento de Mocejón, que recoge como derechos de las personas "A ser asistidas a su búsqueda de información", en la respuesta de la Alcaldía se le ha facilitado unas indicaciones adecuadas con el fin de garantizar que la solicitud formulada por el reclamante que nos ocupa y otras tantas que presenta habitualmente ante esta Administración pueda ser registrada y tramitada, indicándole de forma expresa en el escrito de fecha de ocho de mayo de dos mil diecisiete, objeto de impugnación, los medios de los que puede servirse en este Ilmo. Ayuntamiento para presentar solicitudes [...].*
- *En la segunda alegación formulada por el reclamante éste viene a confundir la fundamentación por la que no resultan objeto de publicación en el Portal de Transparencia de esta Administración los principios rectores de la política laboral de este Ilmo. Ayuntamiento con la fundamentación de la desestimación de una de las alegaciones formuladas a la aprobación inicial del Reglamento de Funcionamiento de la Escuela Infantil Municipal [...].*
- *En cuanto a la tercera alegación del reclamante, relativa a la falta de mención expresa de los recursos que cabe interponer contra la resolución de la petición de información y publicidad, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ante el consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Tribunal Supremo viene considerando la notificación como un acto administrativo de carácter autónomo e independiente del acto notificado y*



que, por tanto, conserva su validez, si reúne los requisitos legales, aunque se anule el acto de notificación [...].

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha suscribieron el pasado 30 de diciembre de 2015 un Convenio para la atribución de la competencia al citado Consejo para la resolución de las reclamaciones previstas en el precitado artículo 24 LTAIBG respecto de las resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y su sector público, y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial y su sector público.

3. Con carácter preliminar hemos de precisar el objeto de la presente Reclamación. De acuerdo con los datos obrantes en el expediente, el objeto originario de la



pretensión planteada por el ahora recurrente en su solicitud de acceso a la información de 3 de mayo de 2017 consistía en obtener una copia de “los principios rectores de la política de personal del Ayuntamiento de Mocejón”. Corresponde, en consecuencia, delimitar la naturaleza y alcance del concepto de “información pública” a los efectos de la LTAIBG dado que si ésta no existe habrá de desestimarse la Reclamación planteada sin que entremos a conocer de las cuestiones formales planteadas.

Tal y como se desprende de su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “*ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento*”.

A estos efectos, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la “información pública” como

“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

De acuerdo con los preceptos acabados de reseñar cabe afirmar que el concepto de información pública que recoge la Ley de Transparencia, en función del cual puede presentarse una solicitud de acceso, se refiere a información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos a la Ley en el momento en que se produce la solicitud. Y ello, para garantizar el objetivo que persigue la norma que no es otro que “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad” - artículo 1 de la LTAIBG-.

Como ha quedado acreditado, tanto en la resolución municipal de 8 de mayo de 2017 como en las alegaciones remitidas por la precitada Corporación municipal, según se ha recogido en los antecedentes, la misma no dispone de la información solicitada más allá de la expresa referencia de preceptos constitucionales que, como en el caso del artículo 14 CE, tienen una eficacia directa -o efecto directo- frente a los poderes públicos. De este modo, cabe concluir desestimando la reclamación planteada dado que, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la LTAIBG, no existe el objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información.



III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **DESESTIMAR** la reclamación presentada, en tanto que no existe el objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

POR SUPLENCIA (RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017)
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda